

CONSEJO DE ASUNTOS EUROPEOS



MEMORANDO OPEX N° 172/2012

AUTORÍA: FUNDACIÓN ALTERNATIVAS – CONSEJO DE ASUNTOS EUROPEOS

PARA: OPEX FECHA: 16/05/2012

ASUNTO: LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO POLÍTICO EN FRANCIA PARA LA UNIÓN EUROPEA Y PARA ESPAÑA

www.falternativas.org/opex

Depósito Legal: M-54881-2008

ISSN: 1989-2845

0.- Introducción

El triunfo del candidato del Partido Socialista (PS), François Hollande, en las elecciones presidenciales francesas, abre un nuevo escenario político en la Unión Europea, en el que Berlín no encontrará ya un aliado tan importante para imponer al resto de los socios comunitarios una forma de abordar la crisis que favorece a Alemania y a los países más ricos de la Unión, y sume a los más débiles en un círculo vicioso de recesión y austeridad. Una política que está fracasando, hundiendo la economía productiva de muchos países, afectando a las prestaciones sociales básicas, y produciendo exclusión social. El nuevo color político en Francia promoverá cambios en las políticas económicas europeas, en cuyo diseño y puesta en práctica España debe participar, con el objetivo de salir cuanto antes de la difícil situación en la que se encuentra.

1. El contexto de las elecciones.

La elección presidencial francesa se ha producido en uno de los momentos más graves de la crisis financiera y económica que golpea a la mayoría de los países europeos desde la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008. El Producto Interior Bruto (PIB) de la Eurozona, después de crecer un modesto 1,5 en 2011, tendrá este año, según Eurostat, un decrecimiento de 3 décimas, mientras la UE a 27 permanecerá estancada, lo que representa una grave - e inesperada - recaída, después de la recesión de 2009, especialmente para los estados miembros que se ven obligados a hacer ajustes fiscales para reducir su deuda o déficit público.

A pesar de que Francia ha soportado mejor la crisis que otros países europeos, también ha sido golpeada por ella de forma importante durante los años de presidencia de Nicolás Sarkozy. Después de haber sufrido reducciones del PIB en 2008 (-0,1) y 2009 (- 2,7), y de crecimientos muy moderados durante los dos años siguientes (en torno al 1,5), las previsiones apuntan en 2012, en el mejor de los casos, a un crecimiento nulo o de pocas décimas. La tasa de desempleo se mantiene cerca del 10%. La deuda pública ha subido casi 20 puntos en los últimos cuatro años, hasta situarse en torno al 86% del PIB, y el déficit público, después de haber superado el 7 % los dos años anteriores, se elevó en el ejercicio de 2011 al 5,2%, lo que complica el objetivo de no superar el 3% en 2013 en un escenario de estancamiento. Finalmente, en enero de este año, la agencia de calificación de riesgo Standard and Poor's rebajó en un grado la calificación AAA de la deuda francesa, lo que tuvo sobre todo un fuerte impacto político en el país, pero también en la prima de riesgo respecto a los bonos alemanes que, de ser inapreciable en 2008, está actualmente en 127 puntos básicos, después de haber superado los 150 a principios del año. Esta situación ha producido, como en muchos otros estados miembros de la UE, recortes presupuestarios, que han afectado al empleo público - especialmente en educación -, y subidas de impuestos indirectos (IVA) que disminuyen el poder adquisitivo sobre todo de las capas más débiles de la población.

En el escenario francés juegan muchas de las tendencias políticas que se han desarrollado en toda la Unión, como consecuencia de los efectos de la crisis, y que han tenido su máxima expresión en las elecciones griegas. El primero es el ascenso de partidos ultranacionalistas, xenófobos y antieuropeistas que prometen

demagógicamente que todo mejorará con el aislamiento, lo que ha llevado a Marine Le Pen a cosechar en la primera vuelta el mejor resultado de la historia del Frente Nacional. El segundo, la creciente fragmentación política en perjuicio de los partidos mayoritarios tradicionales. Este aspecto, influye poco en los resultados finales en Francia debido al sistema mayoritario a doble vuelta, pero puede ser significativo en la primera vuelta de las elecciones a la Asamblea Nacional. En la primera vuelta de las presidenciales, los candidatos de los dos partidos mayoritarios (PS y UMP) obtuvieron en conjunto el 55,81% de los votos frente al 57,03 en 2007.

Con todo, la tendencia más generalizada en Europa, confirmada en esta elección, es que los gobiernos en ejercicio paguen políticamente las consecuencias de la crisis, sea cual sea su color político. Con la notable excepción de Polonia (que está fuera del euro y está creciendo a buen ritmo), prácticamente todas las elecciones que se han celebrado en la UE desde 2008 han producido un cambio en el color político del gobierno. Esto es una obviedad para los analistas políticos, pero no lo es para buena parte de la población que cree que *su* Gobierno lo ha hecho mal y que cambiándolo, mejorarán. No obstante, en los países en los que se ha producido un cambio en el curso de la crisis (14, la mayoría hasta ahora en dirección conservadora), ésta ha seguido su curso, ajena a la actividad en una u otra dirección de gobiernos que en su mayoría no tienen suficiente fuerza para enfrentarla. Esta experiencia demuestra que no sirve cambiar gobiernos, sino que hay que cambiar las políticas que no están dando resultados, y que las soluciones no pueden ser en ningún caso nacionales, sino que solo una solución europea, razonable y eficaz, puede hacernos salir a todos de la crisis actual.

Sarkozy se sumó, después de algunas reticencias iniciales, a las políticas conservadoras y neoliberales que la canciller alemana Ángela Merkel ha impuesto en la UE, al hilo de la crisis, aprovechando la abrumadora mayoría de gobiernos conservadores en los estados miembros, y que consisten básicamente en la exigencia de una disciplina fiscal estricta, sin medidas para evitar la recesión, que hace recaer las consecuencias del *crash* financiero, producido por la desregulación y la especulación, sobre los hombros de los trabajadores y sobre los servicios públicos. El evidente seguidismo de las decisiones tomadas en Berlín, han granjeado al hasta ahora Presidente la desafección de muchos de sus votantes. Su aproximación final a posturas demagógicas de derecha extrema, cercanas a la xenofobia, o incluso antieuropeistas (poniendo en cuestión el tratado de Schengen, por ejemplo), con el objeto de atraer a los votantes del Frente Nacional, no ha tenido éxito. Acercarse a posiciones radicales, o ser comprensivo con ellas, aparte de sus connotaciones éticas, no ha sido nunca rentable políticamente para los partidos de vocación mayoritaria. Además de la desesperación de muchos ciudadanos, que les hace sensibles a la demagogia, buena parte del auge de los partidos ultranacionalistas o xenófobos en Europa, origen de importantes rupturas sociales - en ocasiones violentas -, es achacable a la tibia postura de los partidos conservadores hacia sus planteamientos, o incluso a su apoyo más o menos explícito a tesis próximas.

La propuesta de Hollande está basada sobre todo en la idea de que intentar salir de la crisis únicamente con medidas de austeridad, sin impulsar simultáneamente el crecimiento, es no sólo dolorosa para las capas más débiles de la población, sino sobre todo inútil, en especial en un período de recesión generalizada como el que está sufriendo Europa, y puede producir además una disgregación social peligrosa. La combinación de austeridad fiscal con un impulso al crecimiento, que combata el

desempleo, y con el mantenimiento de los servicios sociales básicos, es una idea compartida por toda las fuerzas progresistas europeas - que la viene defendiendo desde el principio de la crisis -, y que ya ha empezado a calar también en algunos gobiernos conservadores, especialmente en aquéllos países que más están sufriendo. La victoria del candidato socialista es sobre todo un triunfo de esta idea, y puede darle un impulso importante.

2.- Los efectos del cambio.

El primer efecto de la victoria electoral del candidato del PS será el de una revitalización de la izquierda europea, a la que podría liderar en el camino de su recuperación, después de un período en el que ha sido víctima, en la mayoría de los estados de la Unión, del miedo de la población al agravamiento de la crisis. Las elecciones parciales en Alemania, Gran Bretaña e Italia han puesto también de manifiesto una recuperación de los partidos progresistas en estos países que, de confirmarse en las elecciones generales de 2013, podrían extenderse a otros miembros de la UE y dar comienzo así a un cambio de ciclo político en Europa.

De todas formas, la victoria del socialismo francés no será completa hasta que no se celebren las elecciones a la Asamblea Nacional (AN) que tendrán lugar, por el sistema mayoritario a doble vuelta, el 10 y 17 de junio. Es de esperar que la corriente de cambio llegue también de forma mayoritaria a la principal cámara legislativa francesa. Una cohabitación quitaría mucha fuerza al nuevo Presidente para negociar en el seno de la UE y, sobre todo, con Berlín, y, por supuesto, para cambiar la política económica tanto francesa como europea. Por el contrario, el respaldo de una amplia mayoría parlamentaria permitiría a Hollande tomar decisiones importantes, y presentarse en la UE - sobre todo ante Merkel - con una posición negociadora muy sólida.

El Presidente electo es un moderado, pero es posible que en las elecciones a la AN, el sistema de doble vuelta obligue al PS a cerrar muchos acuerdos locales para la segunda vuelta, en algunos casos con los centristas de François Bayrou, pero probablemente en la mayoría de ellos con otras formaciones a su izquierda - especialmente con el Partido de Izquierda de Jean-Luc Mélenchon - lo que podría empujarle a llevar a cabo políticas más radicales, especialmente en lo que se refiere a la política interior, pero también en su política europea.

El triunfo de Hollande no es una cuestión exclusivamente francesa, sino también europea, tanto en sus argumentos como en sus consecuencias, puesto que éstas afectarán a toda la UE, dado que Francia es la segunda economía comunitaria, sin cuyo concurso sería prácticamente imposible llevar a cabo políticas comunes. Su discurso es europeísta y tiende a largo plazo a la federalización, lo que va a producir un reequilibrio con las políticas de renacionalización que están adoptando algunos países, claramente disgregadoras para el proyecto común.

3.- Las nuevas políticas que el cambio en Francia puede impulsar en la UE.

El Presidente francés electo ha reiterado durante su campaña electoral que era necesario cambiar la política de solo austeridad, cuya máxima expresión es el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG), hasta el punto de declarar que de resultar elegido, Francia no lo ratificaría si no era complementado con un pacto por el crecimiento. No obstante, París - esté quien esté en el Elíseo -

no va actuar por su cuenta, sin tener en cuenta al resto de sus socios, y en especial a Berlín. La primera reunión Merkel-Hollande, el 16 de mayo (un día después de la toma de posesión de éste), y la cumbre informal del Consejo Europeo, que ha sido adelantada al 23 de mayo, darán una primera idea del efecto que la elección de Hollande puede tener sobre las políticas económicas de la Unión. Naturalmente, el TCEG no va a ser modificado (ha sido firmado por 25 países y ratificado ya por dos), como se ha apresurado a declarar públicamente la canciller alemana, probablemente para consumo interno pues la intención de Hollande no es modificar lo acordado, sino completarlo con la parte que le falta: el impulso al crecimiento. Esta es una idea que ya se había ido abriendo paso en Bruselas a la vista de la terrible situación por la que están pasando algunos países incapaces de crear por sí mismos las condiciones necesarias para una reactivación económica, mientras tienen que realizar al mismo tiempo duros recortes del gasto público, y ante la terrible realidad de que en la UE hay más de 25 millones de desempleados, una cifra que continua subiendo. El proyecto tomó un importante impulso cuando las encuestas empezaron a anunciar un triunfo del candidato socialista en las presidenciales francesas, y éste dio a conocer sus propuestas.

Lo que se acuerde en esta cumbre informal se plasmará probablemente en la cumbre de finales de junio en un pacto formal de crecimiento, bien en forma de un tratado separado o como una adenda al TCEG. La discusión no se centrará por tanto en la existencia o no de tal pacto, que ya es prácticamente un hecho, sino en su extensión y alcance, en las condiciones de su aplicación y, sobre todo, en su financiación, que no puede ser abordada a nivel nacional so pena de echar por tierra todos los planes de reducción de los déficits públicos, lo que provocaría un agravamiento de la crisis de la deuda soberana. Los fondos tienen que ser comunitarios, bien de partidas no ejecutadas en los presupuestos comunitarios, bien a través de un mandato claro y una refinanciación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que tiene una importante capacidad de apalancamiento. Otra forma de financiación, para grandes proyectos concretos de infraestructuras comunitarias, podría ser la emisión de *project bonds*, con garantía mancomunada.

Además de decidir sobre la financiación, será necesario también discutir sobre la aplicación del plan de crecimiento. Las infraestructuras interestatales pueden ser muy útiles para reactivar ciertos sectores económicos, pero su elección estará lógicamente más condicionada por las necesidades reales, en relación con la actividad económica, que por las tasas de desempleo de un país u otro, con lo que la final podrían llegar a favorecer a los países más ricos. El auténtico problema europeo es el desempleo, que está reduciendo dramáticamente los ingresos de los estados y aumentando el capítulo dedicado a subsidios, además de golpear duramente a la población, y la mejor forma de combatirlo es aplicando las propuestas que se plantean en este documento.

Posiblemente se discuta también en la reunión informal del 23 de mayo el tema del calendario que ha establecido la Comisión para reconducir el déficit hasta el límite del 3% fijado en el Pacto de Estabilidad de 1997, y que es claramente irrealizable para algunos estados miembros. La Comisión parece dispuesta a tomar alguna acción a este respecto, como prolongar un año la consecución del objetivo para España, pero medidas como estas son parches parciales, en ocasiones insuficientes, que no abordan la revisión real de un programa rígido que no tiene en cuenta por principio la diferente situación económica de cada país, ni el nuevo período recesivo que se abate sobre Europa. De hecho, cuando este pacto se aprobó la crisis ni siquiera había comenzado. Es necesario proceder a una revisión completa del calendario que tenga en cuenta la doble recesión que ahora afecta a la

Eurozona, y que se haga país por país, teniendo en cuenta sus circunstancias, del mismo modo que está previsto en el TCEG para el cumplimiento de sus objetivos. Y sería conveniente, por el contrario, que los estados miembros que menos están sufriendo la crisis, y en particular Alemania, llevaran a cabo una política fiscal más expansiva que redundaría sin duda en una cierta reactivación económica de toda la Eurozona.

Otro tema que volverá a estar sobre la mesa es el del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF), pues estaba en el programa electoral de Hollande, y cada vez goza de más apoyos. El ITF, en caso de ser aprobado, debería ser gestionado a nivel comunitario, para dar a la Comisión una fuente de financiación diferente a la proporcionada por los estados miembros, y con ella una mayor libertad de acción y mayor poder comunitario. De todas formas, este impuesto no podría servir para financiar los presupuestos comunitarios si hay estados miembros que no la aplican (Reino Unido ya ha mostrado su oposición frontal por temor a las repercusiones que podría tener para el jugoso negocio de la *city* londinense), porque sería evidentemente injusto. Pero sí se podría crear con su producto un fondo específico de impulso al crecimiento y al empleo, aunque solo pudiera invertirse en los estados miembros que la aplicaran.

Por su parte los *project bonds* podrían ser un primer ensayo para la emisión de deuda garantizada por todos los países de la Unión, es decir de eurobonos, en cualquiera de sus modalidades técnicas, una aspiración lógica de todos aquellos países que teniendo la misma moneda están pagando por su financiación cantidades mucho más elevadas que otros socios comunitarios, con el consiguiente perjuicio en su competitividad. El apoyo decidido de Hollande a esta iniciativa - rechazada hasta ahora por Merkel -, que resolvería de una vez por todas la crisis de la deuda, podría terminar por decantar la balanza hacia su puesta en marcha, aunque probablemente esto tenga que esperar hasta que el TCEG sea ratificado y entre en vigor. El servicio de la deuda se está convirtiendo en una carga insoportable para algunos países, dado los altísimos intereses que deben pagar por ella, pero la aprobación por Bruselas de un relajamiento de los plazos de reducción del déficit público, o de una contabilidad diferente, no va a producir por sí mismo la solución de los problemas. Los eurobonos sí lo harían, porque la economía europea en su conjunto es demasiado grande para ser atacada por la especulación financiera, y la tasa de interés de los bonos europeos estaría probablemente cerca de la que pagan actualmente Alemania o Finlandia, u otros países como EEUU y Japón, cuya deuda es muy superior a la europea. Esta es una batalla que hay que ganar con el apoyo de Hollande.

El mismo efecto positivo sobre la crisis de la deuda lo produciría una actitud más expansiva del Banco Central Europeo (BCE), que es el otro gran tema que el cambio político en Francia volverá a poner encima de la mesa. Hollande defiende que el BCE actúe como prestamista de última instancia, con capacidad ilimitada de préstamo, y pueda comprar deuda soberana como lo hace el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal de EEUU. Esto no es posible con los estatutos actuales y un cambio sustancial requeriría probablemente una modificación de los tratados, de modo que esta línea de acción hay que situarla en el medio plazo. Pero lo que sí puede hacer, porque ya lo ha hecho, es comprar deuda en el mercado secundario para aliviar la insoportable prima de riesgo que están pagando algunos países, y proporcionar liquidez a los bancos nacionales a tipos muy reducidos, hasta que esta liquidez termine por llegar a la economía productiva, a través de créditos a las empresas y, en especial, a las pymes, y promueva una reactivación. El BCE decide por sí mismo cuándo y cómo llevar a cabo estas actuaciones, ya que es

estatutariamente independiente, pero evidentemente su dirección es sensible a la actitud favorable u hostil de los gobiernos europeos hacia sus iniciativas, especialmente de los más importantes, y ahí es donde la influencia de Hollande puede ser importante.

El carácter progresista del nuevo presidente francés influirá también, sobre todo si cuenta con un apoyo parlamentario sólido, en las políticas europeas de control de las inversiones especulativas, como las que hacen los fondos de alto riesgo, especialmente en los mercados de derivados, así como la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal. Durante la campaña de Hollande, la presencia de los bancos franceses en paraísos fiscales ha sido fuertemente cuestionada, llegándose a hablar de una fuerte fiscalización de las actividades que realizan en estas jurisdicciones e, incluso, de la prohibición de su ubicación en las mismas.

Todos estos temas cuya regulación se está haciendo imprescindible para salvar el predominio de la política democrática sobre el poder invisible de los mercados financieros, y deberían ser apoyados por cualquier gobierno, so pena de perder - como sucede ahora en algunos casos - su libertad de acción. Del mismo modo, Hollande ha apoyado la creación de una Agencia europea de calificación de riesgos - que equilibre la hegemonía de las tres grandes -, y ha declarado públicamente que apoyará un crecimiento de los presupuestos comunitarios en el marco plurianual 2014-2020, en contra del acuerdo que alcanzaron en 2010 Merkel, el *premier* británico David Cameron, y Sarkozy, para congelarlos durante todo el período en el 1% del PIB de la UE. Más presupuesto significa más políticas comunes, y por tanto mayor convergencia. Esta iniciativa de Hollande interesa sin duda a todos los estados miembros que necesitan impulsar esa convergencia.

Finalmente, está pendiente el tema de la refinanciación y saneamiento de la banca, que en cada estado miembro tiene unas características distintas y ha pasado por diferentes episodios, pero está lejos de estar resuelto en algunos de ellos, como en España. Abordar nuevos saneamientos con fondos públicos nacionales puede arruinar en algunos países todos los esfuerzos por reducir el déficit, y es muy mal recibido por los mercados financieros, aunque se hagan artificios contables. El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), o su sucesor permanente, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), pueden ser usados para refinar los bancos nacionales sin que eso signifique ningún rescate de países insolventes. Por el contrario, su utilización preventiva para el saneamiento financiero puede evitar tener que llegar a rescates que podrían ser inviables por su volumen, a pesar del aumento del MEDE. Lograr el apoyo de Hollande a esta línea de acción sería, también aquí, decisivo.

Todas estas iniciativas configuran en su conjunto un cambio en las políticas económicas que la UE ha aplicado hasta ahora - y que han demostrado sobradamente su falta de eficacia -, a favor de las tesis que han sostenido los progresistas europeos desde el principio de la crisis. Es posible que encuentren cierta resistencia en algunos estados miembros, más por razones de interés nacional que ideológicas, o por ambas. Pero también es posible que, en sentido contrario, otros gobiernos las apoyen por interés nacional, sin ninguna consideración ideológica. Es de esperar que el nuevo panorama político francés ayude a llegar lo más lejos posible en el imprescindible cambio de rumbo en la economía europea.

4.- La posición española ante las probables propuestas francesas.

Todas y cada una de las medidas que se han analizado más arriba, como consecuencia de las propuestas del programa de François Hollande, interesan a España como nación, en la difícil situación en la que se encuentra, con independencia de quién las defienda o de su origen ideológico. El pacto de crecimiento financiado con recursos comunitarios, la recaudación y reinversión de la TTF, el mayor papel del BEI, el aumento de los presupuestos de la UE, e incluso una política más expansiva por los estados miembros más ricos, son imprescindibles para impulsar el crecimiento económico en nuestro país y combatir el desempleo, que es nuestro principal problema. El saneamiento definitivo de la banca con fondos europeos permitiría revitalizar el crédito, y con él también el crecimiento. La revisión de los plazos de reducción del déficit, la creación de un clima favorable a que el BCE continúe con su política de facilitar liquidez y comprar bonos nacionales en el mercado secundario, e incluso la creación de una agencia europea de calificación de riesgos, aliviarían la dura carga del servicio de la deuda y los consiguientes recortes en nuestro presupuesto, un problema que encontraría una solución definitiva con la emisión de eurobonos y el cambio de los estatutos del BCE hacia un banco de último recurso. Incluso el control de la especulación financiera internacional interesa a cualquier gobierno, ya que - sea cual sea su adscripción ideológica - puede ser víctima de ella, como está sucediendo en la actualidad.

La política española en la UE es sin duda un asunto de Estado, sobre todo en las circunstancias actuales, en el que se deben aparcar las diferencias partidarias, en favor del bien común. Y la salida a la delicada situación económica que estamos viviendo, también lo es, al menos en sus aspectos exteriores, aunque persistan diferencias en las políticas o prioridades interiores. El Gobierno y la oposición tienen que hacer un trabajo paralelo, y complementario, para apoyar las iniciativas que convienen a nuestro país y que pueden recibir un impulso con el cambio político en Francia. El Gobierno desde las instituciones comunitarias, fundamentalmente el Consejo Europeo, y la oposición a través de contactos de partido con sus homólogos franceses. Pero, sobre todo, ambos tienen que llegar a un consenso sobre la posición española en este nuevo escenario de modo que esta posición goce de un respaldo mayoritario en nuestro país y tenga así más fuerza en la Unión.

España debería abordar esta nueva etapa con una actitud proactiva, intentando llegar a acuerdos con Francia, dada la coincidencia de planteamientos entre el programa del nuevo Presidente y las necesidades de nuestra economía, y apoyar decididamente las iniciativas que favorezcan a nuestro país. A este posible acercamiento franco-español podría sumarse Italia, que sufre problemas próximos a los nuestros y necesita soluciones similares, con lo que se crearía una masa crítica importante en el seno de la Unión. No obstante, a nuestro país no le interesa un alejamiento con Alemania, y Berlín debería tener la garantía de que los esfuerzos de austeridad fiscal continuarán hasta donde sea posible.

Las posiciones españolas ante los desarrollos futuros, escalonadas en el tiempo, y planteadas con una vocación ambiciosa pero realista, puesto que ahora pueden coincidir con las de uno de los grandes países de la Unión, podrían ser las siguientes:

A corto plazo (cumbre informal del 23 de mayo y cumbre de finales de junio), el Gobierno español debería defender en Bruselas lo siguiente:

- Apoyar la propuesta de los *project Bonds*.
- Apoyar un plan de crecimiento, vinculado al TCEG (pacto fiscal), tan amplio como sea posible, financiado con fondos europeos, y dirigido básicamente a la creación directa de empleo.
- Apoyar una ampliación de capital del BEI (Banco Europeo de Inversiones).
- Apoyar una revisión del calendario de reducción del déficit que tenga en cuenta la situación particular de cada país y sus necesidades de reactivación, así como mostrarse favorables a una política más expansiva de los países más ricos.
- Apoyar la implementación del ITF (Impuesto sobre las transacciones financieras) y su empleo comunitario para políticas de convergencia y crecimiento, o para investigación y desarrollo.
- Apoyar un empleo parcial del FEEF, o del MEDE, para el saneamiento de la banca a nivel europeo.
- Contribuir a crear en el Consejo Europeo un clima favorable a que el BCE tome decisiones que alivien las primas de riesgo y las necesidades de financiación de los países que más están sufriendo la crisis.

A medio plazo (durante el resto del año):

- Apoyar la emisión de deuda europea (eurobonos), con garantía conjunta, al menos hasta un determinado porcentaje del PIB de cada país, de modo que hasta ese límite la financiación tenga el mismo precio para todos. Este sistema debería ser puesto en marcha en cuanto el TCEG sea ratificado por 12 estados miembros y entre en vigor, lógicamente para los países que lo ratifiquen.
- Apoyar un incremento razonable de los presupuestos comunitarios en el marco presupuestario 2014-2020, sobre todo en la rúbrica 1, dedicada al crecimiento.
- Apoyar unos mecanismos de regulación estricta del sistema financiero, al menos en la Eurozona, con un mayor control de los fondos especulativos y los paraísos fiscales, una separación de banca de inversión y minorista y la implantación de un ITF que disuada las operaciones más especulativas.

- Apoyar la prohibición de la presencia de filiales de bancos comunitarios en paraísos fiscales. En caso de que no haya consenso, aplicar la medida, en un principio, a los bancos pertenecientes a países de la eurozona. Defender igualmente la obligación de repatriación de los fondos afectados a los Estados miembros en un plazo determinado, bajo la amenaza de fuertes sanciones en caso de incumplimiento.
- Apoyar la creación de una Agencia europea de calificación de riesgos.

A largo plazo (teniendo en cuenta el resultado de las elecciones alemanas de 2013)

- Apoyar una revisión de los estatutos del BCE para que se convierta en un banco prestamista de última instancia, a la manera de la Reserva Federal de EEUU.
- Culminar la institucionalización del gobierno económico de la eurozona (Tesoro Europeo, Ministerio de Finanzas Europeo) y la progresiva convergencia de los sistemas fiscales europeos.

Estas últimas recomendaciones de largo plazo, unidas a la esperable evolución de las anteriores, supondrán una real federalización económica entre los estados miembros de la UE que las acepten, lo que conducirá a su vez a una vía de federalización política, y a una nueva institucionalización. Este es el horizonte único que la salida de la crisis ofrece, a no ser que se piense en la destrucción de la UE, y requerirá con el tiempo una modificación sustancial de los tratados en sentido más integrador, que - recordemos - ya fue rechazada por los electores franceses en su forma de Tratado Constitucional. Será necesario observar hasta donde está dispuesto a llegar Hollande en esta dirección, más allá de los intereses directos de su país. Pero mientras estos intereses coincidan con los españoles, no existe mejor alternativa que aprovecharlos.

5.- Conclusión

Las políticas económicas aplicadas hasta ahora por la UE centradas exclusivamente en el rigor fiscal y en el recorte de prestaciones sociales -, están fracasando en la superación de la crisis, y condenando a amplias capas de la población europea, especialmente de los países periféricos, a un sufrimiento de cuyo origen no son responsables, sin que esta línea de acción esté sirviendo para corregir una situación que no puede mejorar sin crecimiento. Por el contrario, se está produciendo una divergencia creciente entre los estados miembros que puede poner en peligro el propio proyecto de construcción europea.

La elección de François Hollande como nuevo presidente francés demuestra que otra política es deseable y abre la posibilidad de cambiar este estado de cosas, en favor de un equilibrio entre la austeridad y el crecimiento. Es una ocasión histórica para cambiar el rumbo de la crisis, que puede permitirnos acceder a políticas que nuestro país necesita imperiosamente. Sería imperdonable que los partidos políticos

Memorando Opex N° 172/2012: Las consecuencias del cambio político en Francia para la Unión Europea y para España

mayoritarios españoles no se pusieran de acuerdo para aprovechar esta oportunidad y maximizar los beneficios que España puede obtener de las decisiones que se tomen. Los responsables políticos españoles - Gobierno y oposición - deben hacer todos los esfuerzos posibles para aprovechar el nuevo impulso que llega del otro lado de los Pirineos para superar la grave crisis de deuda, financiera, económica y social que sufrimos, y reanimar la actividad productiva con el objetivo prioritario de crear empleo sostenible.

Madrid, 16 de mayo de 2012

Memorandos Opex de reciente publicación

- 171/2012: **Efectos de la inversión extranjera en tierras agrícolas: recomendaciones.** Érika Rodríguez Pinzón
- 170/2012: **España y la reforma del sistema Naciones Unidas para el desarrollo: cómo rentabilizar el esfuerzo ante los recortes.** Carmen Sánchez Miranda Gallego
- 169/2012: **La cooperación multilateral española en materia de educación.** Alberto Begué Aguado
- 168/2012: **La política multilateral española para la seguridad alimentaria: aprendizajes, resultados y retos para el futuro.** Pilar Baselga Bayo, Gabriel Ferrero y de Loma-Osorio
- 167/2012: **La encrucijada Siria: militarización o internacionalización.** Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño
- 166/2012: **La cooperación financiera en la ayuda multilateral de la política española de cooperación al desarrollo.** Alfredo Macías
- 165/2011: **El impacto de la primavera árabe en África Subsahariana.** Jesús García-Luengos
- 164/2011: **Elecciones en Egipto: ¿gana la democracia?** Marcos Suárez Sipmann
- 163/2011: **La Cumbre de Durban: un impulso necesario en la crisis del sistema de cooperación global.** Jesús Quintana
- 162/2011: **Cuestiones sobre Sudán a la luz de la ola democrática árabe.** Eva Pilar Francés Bruno
- 161/2011: **La UE ante la Cumbre del G-20 de Cannes. Perspectivas y propuestas.** Gonzalo Caballero Míguez
- 160/2011: **Perú revisitado: la segunda vuelta de las elecciones.** David Scott Palmer y Hugo Montoya Chávez
- 159/2011: **"Schengen: Algo más que política migratoria".** Alfonso Egea De Haro
- 158/2011: **"La escalada de precios de los alimentos: efectos y reacción ante una nueva crisis".** Katty Cascante
- 157/2011: **"Spain, the EU and West Africa: Challenges and Opportunities".** Alex Vines, Manuel López Blanco; edited by Luis Simón.
- 156/2011: **"El "Pacto por el Euro" y sus implicaciones políticas: recomendaciones para el gobierno español".** Varios Autores
- 155/2011: **"The crisis in Libya: Spanish and European options".** Luis Simón y James Rogers
- 154/2011: **"Cómo adaptar las agendas iberoamericana y euroamericana en educación: las metas 2021 tras la cumbre de Mar del Plata".** Érika Rodríguez Pinzón, Fernando Rueda Koster
- 153/2011: **"La Revolución democrática árabe: el nuevo rol de la Unión Europea".** Ignacio Álvarez-Ossorio
- 152/2010. **Perspectivas ante la III Cumbre UE-África; la necesidad de revitalizar el marco de cooperación.** Marcos Suárez Sipmann

Para consultar los memorandos anteriores en pdf, pueden visitar nuestra página web <http://www.falternativas.org/opex>